

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

15.- No habiéndosele podido notificar a la empresa Mohamed Driss Abdelkader, N.I.F. 45.282.439-Q, la Resolución dictada por la Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con fecha 19-11-99, en primera instancia, en expediente dimanante de Acta de Infracción ref. AIS-273/99, levantada a la empresa referida con fecha 28-10-99, por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Resolución en la que se hace constar:

Visto el expediente sancionador incoado por acta de infracción n.º AIS-273/99, extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, en fecha 28-10-99, a la empresa Mohamed Driss Abdelkader.

HECHOS

Primero: Las circunstancias y consideraciones que constan en el Acta se dan por reproducidas en la presente Resolución.

Segundo: A la citada empresa le fué notificada dicha Acta, haciéndole presente su derecho a formular contra ella las alegaciones que estimase pertinentes en defensa de su derecho ante el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sin que se hayan presentado dentro del plazo legal.

Tercero: En la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales y reglamentarias de aplicación conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimiento para las imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social (B.O.E. 3-6-98).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La infracción reseñada en el Acta está adecuadamente tipificada, se ha graduado debidamente la propuesta de sanción y su cuantificación está dentro de los límites legales, de conformidad con los arts. 36 y 37 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social (B.O.E. 15-4-88).

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, la Disposición Adicional única del R.D. 928/1998, de 14 de mayo, y el R.D. 2725/1998, de 18 de

diciembre (B.O.E. 12-1-1999), es competente este órgano para la resolución de este expediente.

Tercero: Que el art. 52.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de imposición de sanciones en el Orden Social y el art. 15 del R.D. 928/1988, de 14 de mayo, otorgan la presunción de certeza a los hechos consignados en acta de infracción por parte de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que el titular del acta no ha desvirtuado tales hechos.

Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación.

Resuelvo: Que procede imponer a la citada empresa la sanción de Cincuenta mil una pesetas (50.001).

Notifíquese esta Resolución al interesado, haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar Recurso de Alzada ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de acuerdo con los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 53 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, en el plazo de Un Mes, contado a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último sea inhábil.

Adviértase que, de no ser entablado éste en tiempo y forma, el pago de la sanción impuesta deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras, hasta el último día del mes siguiente al de recepción de la reclamación de la deuda formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, por los medios de pago en efectivo y demás condiciones establecidas en el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (R.D. 1637/1995, de 6 de octubre, B.O.E. del 24), y que, en defecto de pago de dicho plazo, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva.

Melilla, a 19 de noviembre de 1999.

La Jefe de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Lucía de Rafael Coto.

Para que surta los efectos de notificación, de conformidad con cuanto establece el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expide el presente en Melilla a 16 de diciembre de 1999.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.